

B. INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL DIPUTADO ACEÑOLAZA

Datos de la Secretaría de Minería de la Nación en materia de producción, importación, exportación e inversión minera

Si pretendemos hablar de cómo se encuentran las actuales inversiones mineras y cuál suponemos habrá de ser el marco en el cual ellas se canalizarán luego de la aprobación del presente proyecto de ley, es bueno

que hagamos un análisis con datos objetivos en mano.

Debo destacar que los datos que a continuación se dan pertenecen a registros oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación, pudiendo observarse en ellos muy buenos indicadores sobre el tema en cuestión, como así mismo análisis comparativos sobre la inversión minera.

Así por ejemplo tiene una producción global minera cuyo valor global es del orden de los \$ 350 millones,

la importación es cercana al 50 % de dicho valor, mientras que la exportación en ningún caso ha superado el 10 %. Los mayores registros en toneladas de producción minera argentina global verificada en los años 1979-1980 estuvo en el orden de las 65 millones de toneladas, habiendo declinado en el año 1990 a escasos 38 millones. Si estas cifras las comparamos con el valor que hoy se tiene, se deduce que la cifra global en la práctica no alcanzó los 1.000 pesos en el lapso considerado.

Cuadro 1

Esto a las claras habla de que somos un país que depende fuertemente de la exportación para poder mantener en buen estado nuestra infraestructura industrial. Esto se magnifica notoriamente en el rubro de los minerales metalíferos (hierro, aluminio), cuya producción en la práctica es inexistente.

Como puede observarse en el cuadro del comercio exterior apreciamos que nuestra realidad entre importación-exportación es absolutamente negativa. Es representativo de un lapso que va desde 1970 a 1991.

Cuadro 2

En el gráfico de barras del cuadro 3 puede apreciarse la estructura de nuestro comercio exterior de minerales metalíferos, mientras que el número 4 sirve para ilustrar la de no metalíferos y rocas de aplicación.

Cuadro 3

Cuadro 4

También es ilustrativo el gráfico donde se expone, en barras, la media de la década del 70, la media de la década del 80 como asimismo la correspondiente al año 1991. Las dos primeras indican un fuerte crecimiento de las importaciones que supera el 100 %, mientras que las exportaciones si bien tienen un crecimiento parecido, su representación es insignificante.

Cuadro 5

La ley 22.095 de promoción minera dictada en 1979 da lugar a una interpretación paradójica. Al ponerse ésta en funciones, más que promover da la sensación que dio lugar a un impacto negativo. Si nos atenemos a las cifras de importación es fácil deducir que la minería argentina entró en un proceso de notoria declinación. Es obvio que no fue dicha ley la responsable, pero es algo digno de destacar que no produjo el efecto buscado. Los gráficos que a continuación se exponen comparan la producción con el PBI, en el primer caso (cuadro 6) indicando la participación y en el segundo caso (cuadro 7) comparando PBI nacional, ligeramente ascendente y el PBI minero totalmente declinante.

Cuadro 6

Cuadro 7

Pasando al análisis de los resultados de la aplicación de la ley 22.095 vale la pena tener en consideración lo que se representa en el cuadro 8.

Cuadro 8

Una aparente caída en el interés de trabajar en la actividad minera se da luego de la promulgación de la

ley 22.095. Digo aparente porque es posible que este nuevo ordenamiento no fuera requerido en razón a otros factores ajenos a la actividad minera. De allí que el número de inscriptos haya caído tan abruptamente como se deduce de la observación del cuadro 9.

Cuadro 9

Si se toman en consideración los beneficios establecidos por la ley 22.095 en el lapso 1974-1989 puede apreciarse la magnitud del costo fiscal que la misma produjo, lamentablemente sin el resultado que se pretendió lograr.

Cuadro 10

El precedente se complementa con el cuadro 11 en el cual no sólo se aprecia la magnitud del beneficio sino que también se concluye sobre la baja incidencia que otorgó esta ley.

Cuadro 11

También nos ilustra la Secretaría de Minería acerca del monto de las desgravaciones impositivas, según la direccionalidad de la inversión, pudiéndose comprobar que la mayoría lo fue hacia el sector de bienes de capital, lo cual no es malo ya que presupone que ellas se canalizaron hacia la modernización del equipamiento y de la infraestructura general de los yacimientos en producción.

Cuadro 12

Ahora bien, si se analiza hacia dónde fueron los beneficios de esta ley se descubre que en mayor proporción la requirió la explotación de las calizas y carbonatos y en menor proporción los minerales metálicos.

Cuadro 13

El costo fiscal teórico y las desgravaciones se incluyen en los cuadros 14 y 15.

Cuadro 14

Cuadro 15

Los actuales proyectos en curso en sus principales parámetros se detallan a continuación.

Cuadro 16

Un dato de interés es saber los montos de utilización del fondo minero desde el año 1975 a 1989 que acumulan un monto del orden de los 23 millones de pesos, cifra de escasa significación teniendo en cuenta los valores normales de lo que representa una inversión minera.

Cuadro 17

Cuadro 18

Para finalizar es conveniente tener un análisis comparativo entre lo que representa la ley 22.095 y el actual proyecto (cuadro 19), como asimismo en un diagrama (cuadro 20) puede observarse la incidencia fiscal que tendrá la ley en debate (9,5 %) contra la que ha tenido la que se reemplaza (90,5 %).

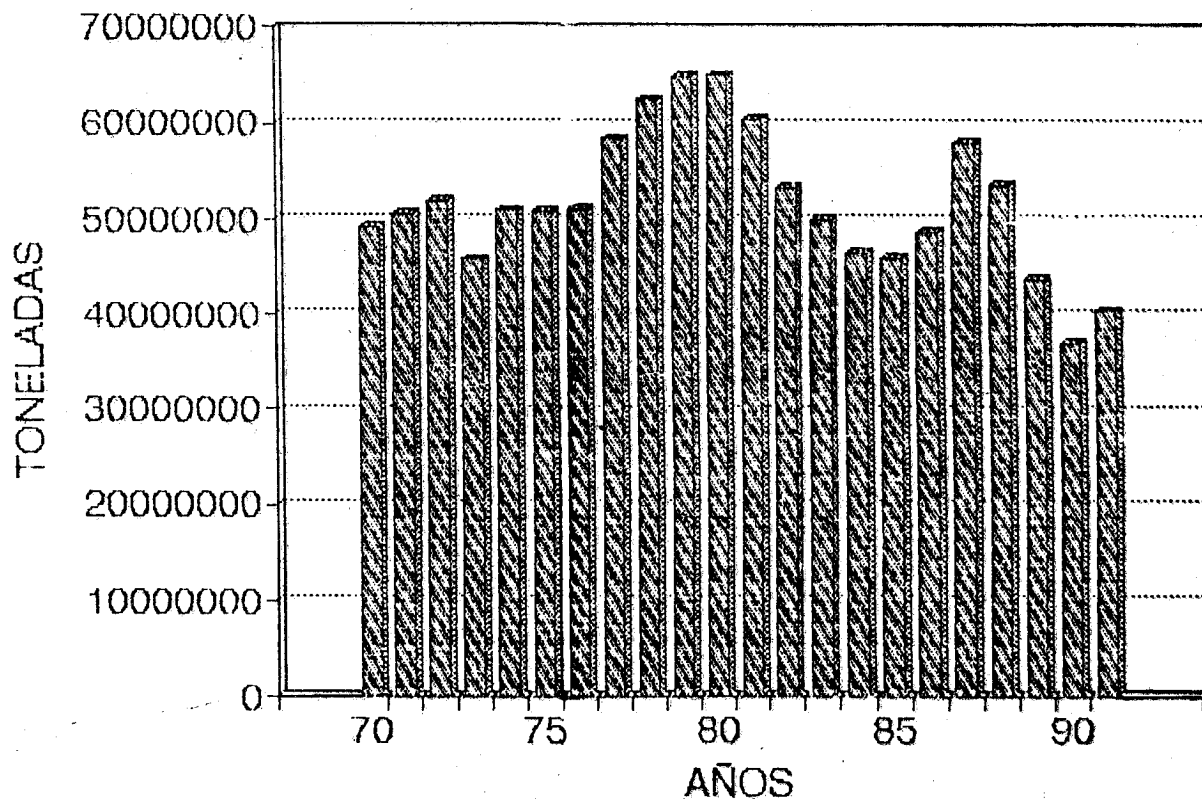
Cuadro 19

Cuadro 20

CUADRO 1

PRODUCCION MINERA

TONELADAS DE MINERALES



CUADRO 2

SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE SUSTANCIAS MINERALES

(miles de dólares)

AÑO	CAPITULO 25 (a)			CAPITULO 26 (b)		
	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones	Saldo
1970	1.822	21.891	(20.069)	4.633	23.962	(19.329)
1971	3.086	13.734	(10.648)	4.150	26.638	(22.488)
1972	3.639	13.941	(10.302)	3.241	20.774	(17.533)
1973	4.573	12.926	(8.353)	2.631	26.233	(23.602)
1974	7.884	25.451	(17.567)	4.795	46.000	(41.205)
1975	5.651	31.660	(26.009)	2.055	77.938	(75.883)
1976	8.441	32.017	(23.576)	138	75.563	(75.425)
1977	9.967	30.994	(21.027)	459	93.031	(92.572)
1978	12.720	24.628	(11.908)	8.189	77.300	(69.111)
1979	9.614	63.187	(53.573)	10.339	109.393	(99.054)
1980	6.171	58.533	(52.362)	29.403	105.312	(75.909)
1981	12.155	39.900	(27.745)	23.314	102.045	(78.731)
1982	16.623	35.996	(19.373)	13.215	91.690	(78.475)
1983	7.589	41.928	(34.339)	15.221	73.756	(58.535)
1984	8.290	45.978	(37.688)	9.709	77.107	(67.398)
1985	9.092	24.095	(15.003)	12.489	85.735	(73.246)
1986	9.980	41.587	(31.607)	9.489	105.513	(96.024)
1987	13.195	45.518	(32.323)	14.721	112.931	(98.210)
1988	13.158	36.673	(23.515)	9.022	115.403	(106.381)
1989	14.195	35.380	(21.185)	14.514	150.698	(136.184)
1990	11.979	29.919	(17.940)	18.380	144.094	(125.714)
1991	15.256	41.354	(26.098)	9.476	114.822	(105.346)

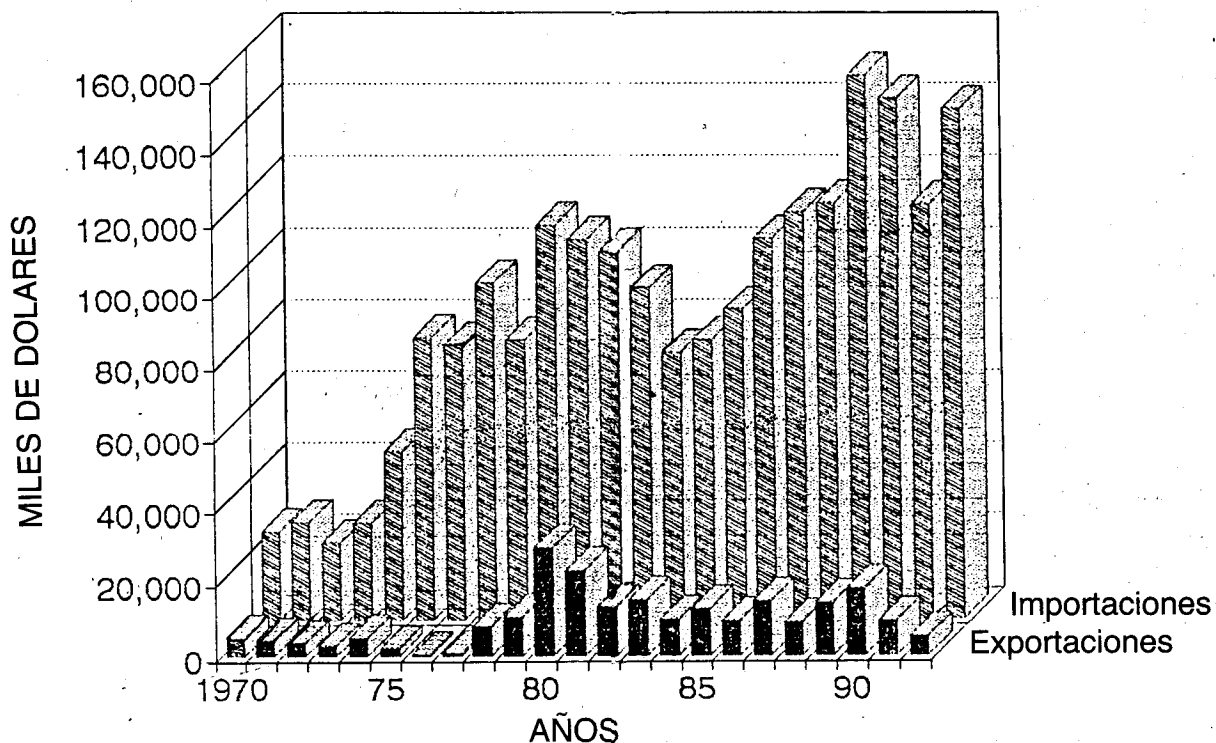
a) Capítulo 25: Incluye a minerales no metalíferos y rocas de aplicación.

b) Capítulo 26: Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas.

FUENTE: Secretaría de Minería, Dirección de Evaluación de Yacimientos, en base a datos del INDEC.

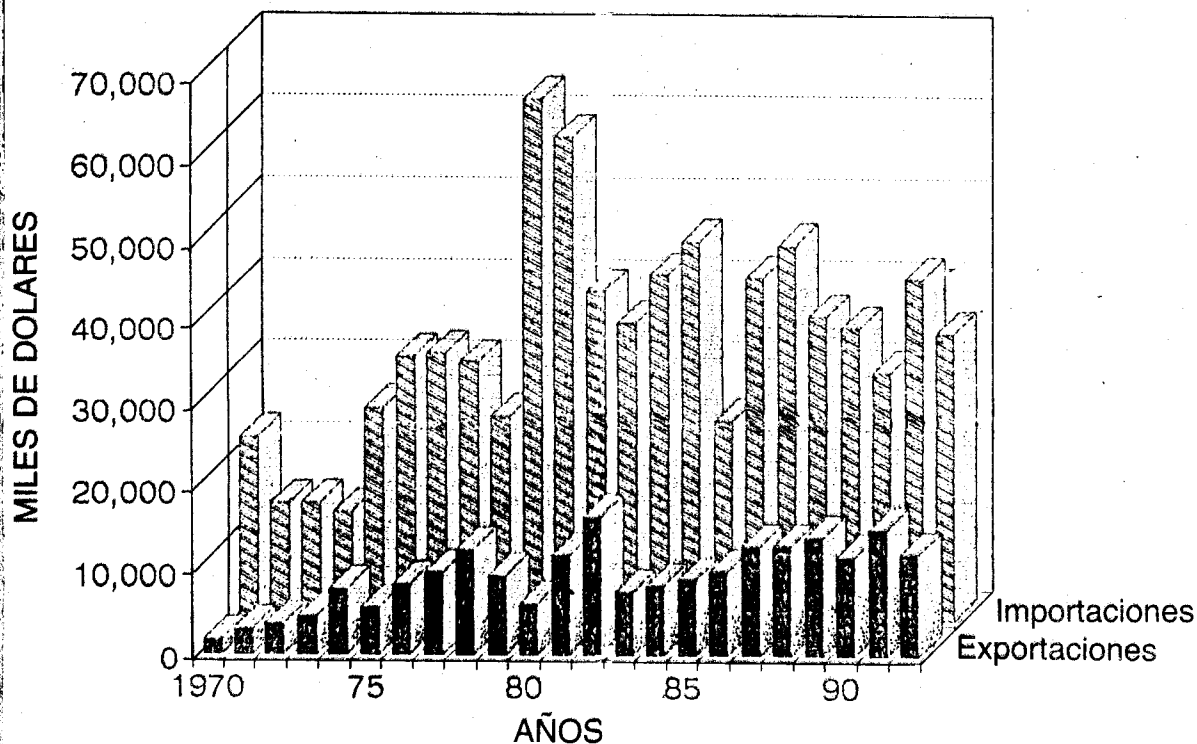
CUADRO 3

COMERCIO EXTERIOR DE MINERALES METALIFEROS

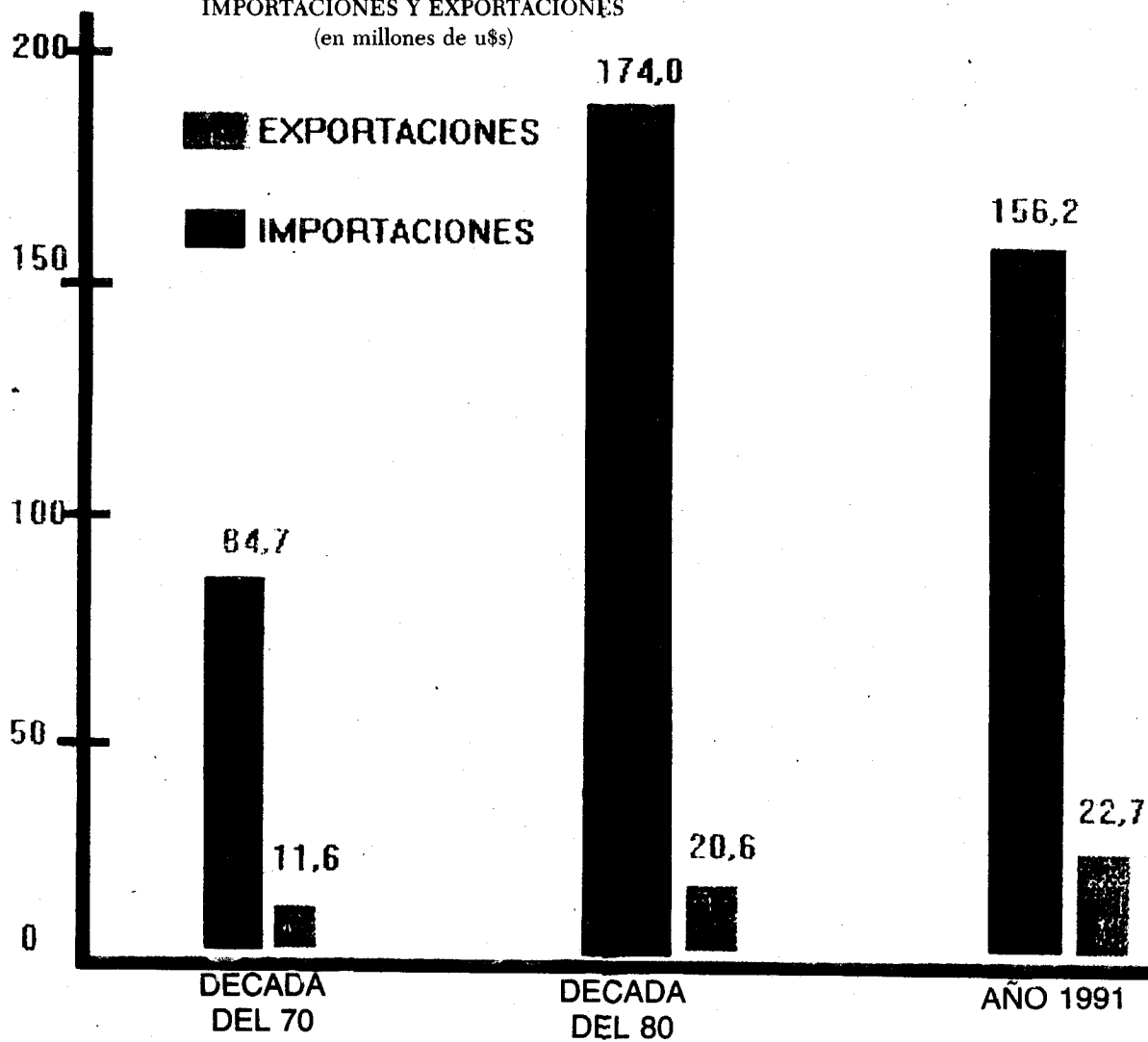


CUADRO 4

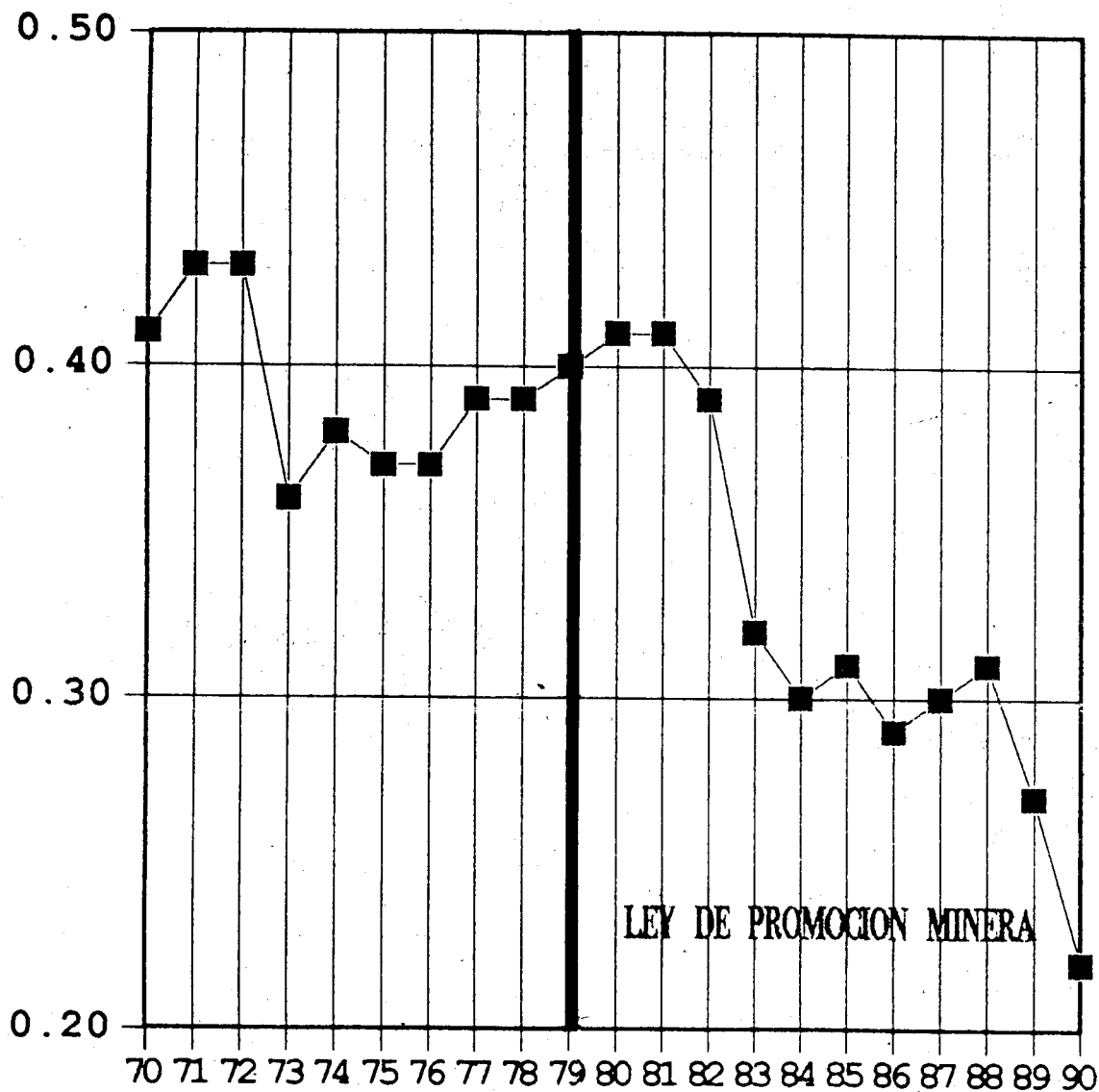
COMERCIO EXTERIOR DE MINERALES NO METALIFEROS Y ROCAS DE APLICACION



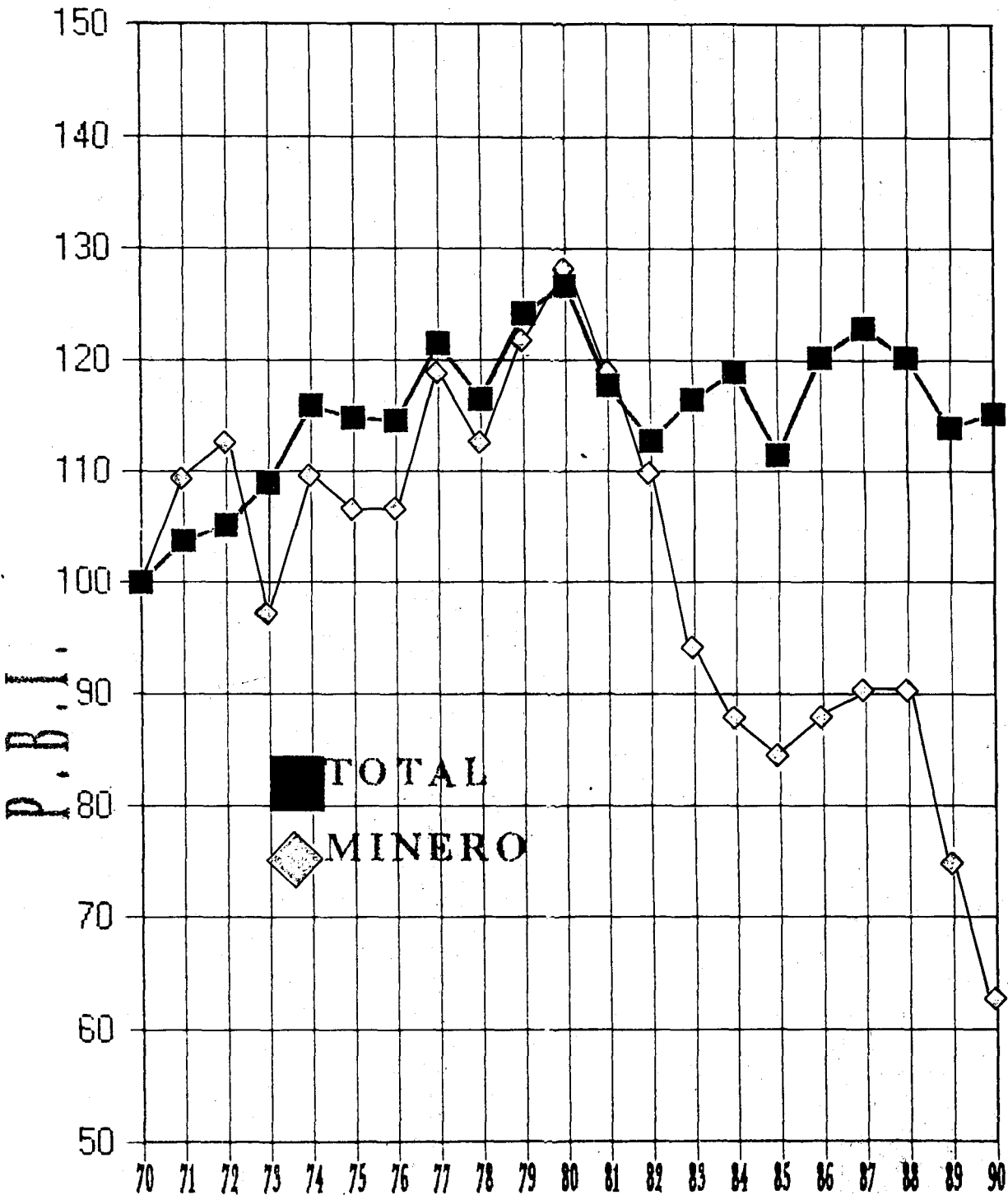
CUADRO 5

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
(en millones de u\$s)

CUADRO 6

PARTICIPACION DE LA ACTIVIDAD MINERA
EN EL PBI

CUADRO 7
COMPORTAMIENTO DEL PBI TOTAL Y EL PBI MINERO.
(Con base 100 en 1970)



CUADRO 8

LEY DE PROMOCION MINERA

BENEFICIARIOS DEL REGIMEN DE PROMOCION MINERA

TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS		428	100%
* NO REALIZAN ACTIVIDAD		145	34%
* CON ACTIVIDAD NO REPRESENTATIVA		146	34%
* CON ACTIVIDAD MINERA		130	30%
* CON PROYECTOS EN CURSO		7	2%
BENEFICIARIOS CON ACTIVIDAD MINERA	Productores de aleaciones de metales como silicio, silicioro de calcio, ferrosilicio, ferromanganeso, carburo de calcio.	6	1.4%
	Productores de minerales de primera categoría y metales nobles.	12	2.8%
	Productores de minerales de segunda categoría. Cuarzo, arcillas, baritina, bentonita, talco, boratos, dolomitas, etcétera.	72	16.8%
	Productores de rocas de aplicación o materiales que se destinan a la construcción. Mármoles, granitos, áridos, tosca, cales, etcétera.	40	9.3%
	TOTAL	130	30.0%

CUADRO 9

LEY DE PROMOCION MINERA

INSCRITOS EN EL REGIMEN

AÑOS 1975 A 1989

AÑO	NUMERO DE INSCRIPCION	INCREMENTO ANUAL DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1975	237	237	Promulgación de la ley 20.551
1976	622	385	
1977	763	141	
1978	878	115	Promulgación de la ley 22.095.
1979	981	103	
1980	1050	69	
1981	1140	69	
1982	1216	90	
1983	1266	76	
1984	1308	50	
1985	1357	42	Recupera la ley de beneficio de reducción del IVA.
1986	1386	49	
1987	1427	29	
1988	1465	41	
1989	1518	38	
TOTAL		1518	

CUADRO 10

LEY DE PROMOCION MINERA 22.095

APORTE FISCAL A LA PROMOCION

(En millones de u\$s)

BENEFICIOS DE LA LEY 22.095	CONCEPTO	TOTAL PERIODO 1974-1989	PROMEDIO ANUAL
ART. 9º	DEDUCCION DE LOS GASTOS E INVERSIONES DEL BALANCE IMPOSITIVO IMPUESTO A LAS GANANCIAS	83.86	5.25
ART. 11	REDUCCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (01/11/86 a 30/04/89)	128.53	51.41
ART. 17	EXENCIONES IMPOSITIVAS A LA EMPRESA PROMOVIDA (Ganancias, IVA, Capitales y sellos)	31.17	2.67
ART. 19	DESGRAVACIONES (Ganancias)	55.08	3.42
ART. 18	DIFERIMIENTOS (IVA, capitales y ganancias)	116.00	7.27
FONDO DE FOMENTO MINERO	CREDITOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE EXPLORACION	23.01	1.53
TOTAL APOORTE FISCAL		414.64	70.02
TOTAL COSTO FISCAL (excluye diferimiento y fondo fomento)		321.65	64.28

CUADRO 11
LEY DE PROMOCION MINERA
COSTO FISCAL HASTA 1989
(millones de u\$s)

CONCEPTO		CONCLUSIONES	
REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LA LEY 22.095	Empresas con inscripción vigentes 428	De los cuales: * No realizan actividad 145 * Actividad no representativa 146 * Con actividad minera 130	Del Registro de Beneficiarios sólo el 30% es representativo; el 70% restante requiere de un esfuerzo administrativo no comparable con los resultados
INVERSIONES BALANCE IMPOSITIVO ART. 9º LEY 22.095	Entre los años 1974 a 1989 se realizaron inversiones por: u\$s 254	En: * Exploración 33.29 * Bienes 165.26 * Infraestructura 55.55	El costo fiscal total incurrido es de: u\$s 83,86 equivalente a un promedio anual de: u\$s 5,25
REDUCCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ART. 11 DE LA LEY 22.095	El beneficio neto por la retención del IVA y la absorción como costo del IVA compras es de un 10%	El beneficio del IVA pudo gozarse a pleno sólo en los años 1987 y 1988. Luego de la sanción de la ley 23.349	El beneficio total asciende a: u\$s 51 anuales. De los cuales u\$s 18 por año beneficiaron a la industria de fabricación de cal
EXENCION IMPOSITIVA DE PROYECTOS APROBADOS ART. 17 LEY 22.095	El costo fiscal teórico de los proyectos aprobados desde 1975 y con incidencia hasta el año 2005 asciende a: u\$s 83	El costo fiscal teórico incurrido hasta el año 1989 inclusive es de: u\$s 31,17	El costo fiscal teórico anual promedio es de: u\$s 2,7

CUADRO 12

LEY DE PROMOCION MINERA

INVERSIONES DEDUCIDAS DEL BALANCE IMPOSITIVO

ARTICULO 9º DE LA LEY 22.095

(desgravaciones impositivas)

PERIODO 1974 a 1989

VALORES al 28-2-1992

Concepto de las inversiones realizadas	1	2	3	4	5	6
Por Anexo I: Gastos de prospección, ex- ploración e investigación	33.29	33.29	10.99	2.08	0.69	13%
Por Anexo II: Inversiones en bienes de capital (maquinarias, equipos y rodados)	165.26	165.26	54.54	10.33	3.41	65%
Por Anexo III: Inversiones en infraes- tructura y servicios	55.55	55.55	18.33	3.47	1.15	22%
TOTALES	254.10	254.10	83.86	15.88	5.25	100%

- Inversión realizada en millones de pesos.
- Inversión realizada equivalente en millones de dólares.
- Costo fiscal millones de dólares.
- Promedio anual de inversiones realizadas millones de u\$s.
- Promedio anual de costo fiscal generado millones u\$s.
- Porcentaje.

CUADRO 13

COSTO FISCAL TEORICO ANUAL

(por aplicación del artículo 11)

VALORES ESTIMADOS AL 28-8-1992

MINERAL GRAVADO	Beneficio neto por IVA retenido por mineral (en u\$s)
Carbonato de calcio	1.631.357
Vermiculita mica	483.610
Bentonita	1.126.216
Serpentina	21.531
Tosca	19.874
Caliza	3.251.121
Cuarzo	508.453
Caolín	879.442
Fluorita	36.436
Baritina	776.758
Talco	579.670
Diatomita	34.780
Piedra laja - Arena	170.589
Dolomita	1.609.826
Conchilla	281.554
Arcillas	861.224
Yeso	2.040.438
Mármol y granito	799.945
Cales	18.513.004
Sulfato de aluminio	3.062.314
Sulfato de sodio	571.389
Carburo de tungsteno	218.618
Carburo de calcio	3.738.043
Plata	806.569
Plomo lingote	1.488.924
Concentrados de Zn	4.279.621
Concentrados de Pb	1.894.693
Diuranato de amonio	667.449
TOTAL ANUAL BENEFICIO	51.406.792

CUADRO 14
LEY DE PROMOCION MINERA
COSTO FISCAL TEORICO
(Por aplicación artículo 17)
AÑOS 1975 A 2005
VALORES AL 28/2/1992

AÑO	COSTO FISCAL TEORICO —Valores en pesos—	COSTO FISCAL TEORICO —Valores en dólares—
1975	17.421	17.421
1976	38.824	38.824
1977	40.542	40.542
1978	60.261	60.261
1979	111.288	111.288
1980	1.234.839	1.234.839
1981	1.072.806	1.072.806
1982	992.982	992.982
1983	1.943.715	1.943.715
1984	3.940.038	3.940.038
1985	4.315.039	4.315.039
1986	1.958.574	1.958.574
1987	4.966.191	4.966.191
1988	7.217.442	7.217.442
1989	3.258.441 (*)	3.258.440 (*)
1990	3.289.069 (*)	3.289.069 (*)
1991	6.835.660	6.835.660
1992	6.804.698	6.804.698
1993	5.678.982	5.678.982
1994	4.872.997	4.872.997
1995	4.425.321	4.425.321
1996	3.976.759	3.976.759
1997	3.230.584	3.230.584
1999	2.858.880	2.858.880
2000	2.292.219	2.292.219
2001	1.725.077	1.725.077
2002	1.151.734	1.151.734
2003	654.241	654.241
2004	222.618	222.618
2005	96.419	96.419
TOTAL	82.703.538	82.703.538
COSTO ANUAL PROMEDIO	2.667.856	2.667.856

(*) Ley de emergencia económica reducción del 50 %.

CUADRO 15

LEY DE PROMOCION MINERA
BENEFICIOS ESPECIALES
DIFERIMIENTOS Y DESGRAVACIONES IMPOSITIVAS

AÑOS 1975 A 1990

VALORES AL 28/2/92

AÑO	MONTO DE CAPTACIONES —Valores en pesos—	MONTO DE CAPTACIONES —Valores en dólares—
1975	701.822	701.822
1976	11.996.158	11.996.158
1977	3.209.802	3.209.802
1978	14.069.077	14.069.077
1979	2.385.909	2.385.909
1980	15.675.954	15.675.954
1981	54.740.098	54.740.098
1982	3.067.869	3.067.869
1983	8.522.604	8.522.604
1984	5.536.989	5.536.989
1985	18.916.536	18.916.536
1986	18.924.236	18.924.236
1987	6.637.714	6.637.714
1988	4.147.263	4.147.263
1989	2.507.032	2.507.032
1990	42.372	42.372
TOTAL	171.081.434	171.081.434
PROMEDIO ANUAL	10.692.590	10.692.590

CUADRO 16

LEY DE PROMOCION MINERA

PROYECTOS EN CURSO

(En millones de U\$S)

PROYECTOS	1	2	3	4	5
Electro. El Carmen	1,5	3,1	2,0	0,11	1,64
Providencia S. A.	3,7	5,2	1,0	0,13	1,93
Pagrun S. A.	0,6	1,1	0,2	0,02	0,12
Luyaba S. A.	17,5	10,5	1,6	0,73	10,91
Silarsa S. A.	8,3	11,7	0,5	0,45	7,17
Granitex S. A.	3,4	0,7	0,7	0,09	1,51
Agramar S. A.	2,2	0,8	0,0	0,07	1,14
Grancor S. A.	15,7	11,1	0,0	0,57	9,71
Cerro Castillo S. A.	19,5	14,4	12,2	0,0	0,0
TOTAL	72,4	58,6	18,2	2,17	34,13
PROMEDIO	8,0	6,5	2,0	0,24	3,79

1. Monto de inversión
2. Ventas anuales a régimen de producción
3. Monto captado
4. Costo fiscal anual promedio imputado
5. Costo total fiscal imputado

CUADRO 17

LEY DE PROMOCION MINERA

FONDO DE FOMENTO MINERO

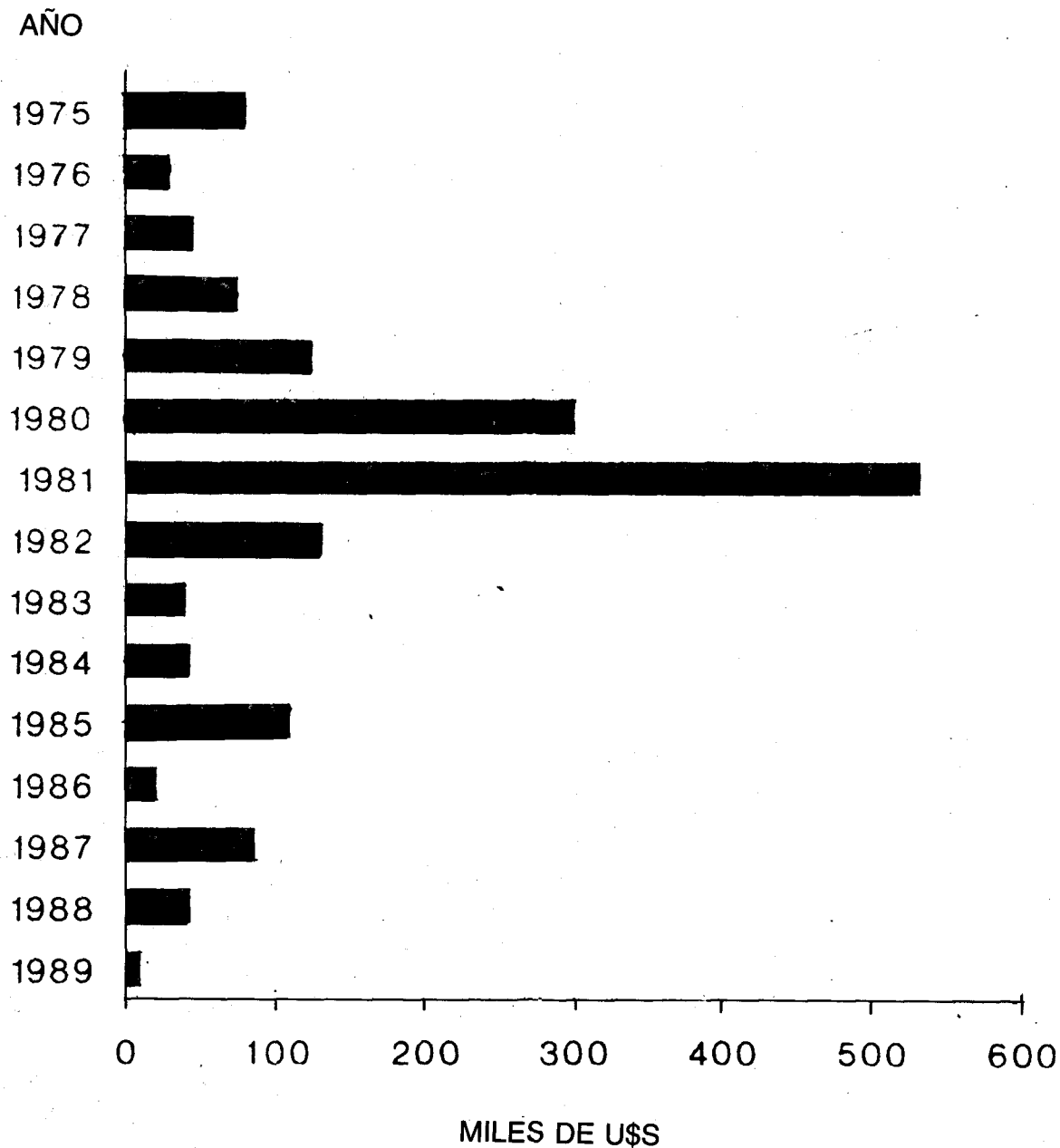
AÑOS 1975 A 1989

VALORES ESTIMADOS AL 28-2-92

AÑO	MONTO EXPRESADO EN PESOS	MONTO EXPRESADO EN DOLARES
1975	1.810.676	1.810.676
1976	623.880	623.880
1977	1.737.550	1.737.550
1978	1.194.865	1.194.865
1979	1.438.376	1.438.376
1980	2.436.099	2.436.099
1981	5.629.592	5.629.592
1982	2.095.741	2.095.741
1983	614.140	614.140
1984	653.756	653.756
1985	2.061.242	2.061.242
1986	341.150	341.150
1987	1.518.648	1.518.648
1988	735.012	735.012
1989	121.809	121.809
TOTAL	23.012.537	23.012.537

CUADRO 18
FONDO FOMENTO MINERO
UTILIZACION

(Ley 22.095 que se deroga)



CUADRO 19

CUADRO COMPARATIVO

Ley de Promoción Minera 22.095 (suspendida parcialmente por la ley de emergencia económica)
y proyecto de ley "Régimen de inversiones mineras"

CONCEPTOS	LEY 22.095 PROMOCION MINERA	PROYECTO DE LEY REGIMEN INVERSIONES
Ambito de aplicación	Todo el territorio	Toda provincia del territorio nacional que adhiera
Alcances	Toda persona física o jurídica que desarrolle actividad minera	Idem
Actividades comprendidas	Todas, excepto: hidrocarburos, industria del cemento, cerámicas rojas, arenas no metalíferas	Idem
Relación con las provincias a fin de garantizar estabilidad	No prevé	<ul style="list-style-type: none"> — Convenio de adhesión — Tratamiento impositivo análogo — Monto máximo de regalías (3%) — Mecanismo que garantiza al privado el tratamiento comprometido
Instrumentación	A través de un proyecto que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación	Es automático con la sola inscripción en el registro abierto al efecto.
Medio ambiente	No prevé	Se faculta al privado a constituir una previsión, deducible a fin de subsanar las posibles alteraciones al medio ambiente.

CUADRO 19 (Continuación)

TRATAMIENTO FISCAL	LEY DE PROMOCION	LEY DE INVERSION
Estabilidad fiscal	No se trata	Se busca dar garantía de estabilidad por un lapso de 30 años
Impuesto a las ganancias	<ul style="list-style-type: none"> — Deducción de toda la inversión — Exención por 15 años — Diferimiento durante 5 años — Amortización acelerada de la inversión 	<ul style="list-style-type: none"> — Sólo se permite la deducción de las inversiones en exploración hasta llegar a la factibilidad técnico-económica — Amortización acelerada de la inversión (3 años)
IVA capitales y patrimonio neto	— Exención por 15 años	— No existe exención alguna
Impuesto sobre los activos	— Por artículo 32 se le da igual tratamiento que a capitales y patrimonio neto	— Exentos todos los inscritos al presente régimen
Avalúo de reservas	— Capitalización del 50% con aval del Estado	— Se le da igual tratamiento pero se elimina el aval del Estado
Importaciones	En ambos casos se les da igual tratamiento, liberando de todo derecho a la importación de bienes de capital y equipos especiales	

Conceptos del espíritu de la ley de inversiones mineras

* No se estatiza el riesgo minero.

* Se promueve la inversión en las etapas de exploración y de inversión hasta la puesta en marcha, bajo la concepción que una vez determinada la factibilidad técnico-económica desaparece el riesgo minero, y que asumiendo el riesgo empresario se deben pagar los impuestos.

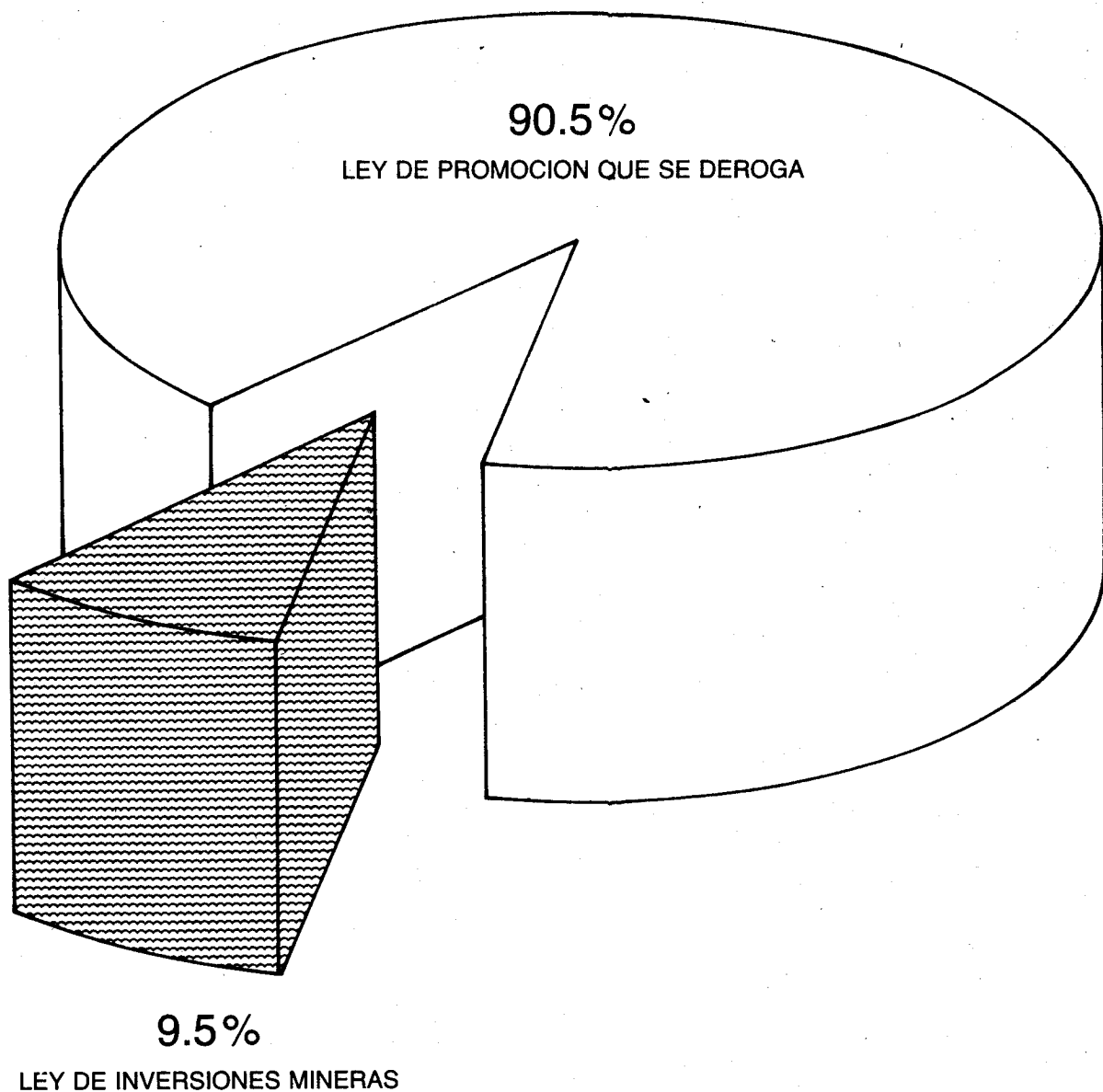
* Se generan condiciones de competitividad internacional en el campo de las inversiones mineras.

* Que los costos de montaje se aproximen a los internacionales.

CUADRO 20

RELACION COSTO FISCAL RELATIVO

Ley promoción 22.095 (Ley de inversiones mineras)



INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SODERO NIEVAS

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de inversiones mineras

Dice un adagio que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Anticipando opinión debo manifestar que el proyecto es totalmente perfecto y así como está redactado entiendo que al aplicarse generará resistencias en las autoridades provinciales. Quizás también pudieran encontrarse otras falencias, pero el tiempo me impide profundizar con mayor intensidad algunas instituciones que el proyecto ha señalado.

Debo decir que el proyecto sigue en general las últimas tendencias legislativas en materia minera, tal lo que sucedió con la ley 22.259, que reforma el Código de Minería, principalmente en el título dedicado a la minería a gran escala, número XIX.

El proyecto indirectamente ataca preceptos jurídicos de gran importancia para el derecho minero, tales como por ejemplo, las facultades impositivas de las provincias y las tasas que permiten por diversas leyes que puedan percibir los municipios. A su vez, ataca el artículo 7º del Código de Minería, que establece: "Las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias según el territorio en que se encuentren". Las provincias son por tradición histórica y jurídica los titulares del dominio eminente de los yacimientos de minerales.

Como dicen diversos autores, entre ellos Joaquín V. González en sus *Obras completas*, la Constitución nada dice respecto de la propiedad minera y el artículo 67, inciso 11, faculta al Congreso a dictar el Código de Minería, el que es, como bien refiere, un código orgánicamente completo (página 481).

También ha referido González que el Código Civil era el primer código que se sancionaba después de la Constitución; era el primer código completo en todas las cuestiones fundamentales (obra citada página 481). Se refiere a la época posterior a la reincorporación de la provincia de Buenos Aires a la República Argentina.

El Código Civil se ha referido a la propiedad minera en artículos fundamentales: el artículo 2.518, que acepta la autonomía del derecho minero, nos lo dice: "La propiedad del suelo se extiende en toda su profundidad, y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas por las leyes especiales sobre ambos objetos..."

El artículo 2.342, inciso 2, establece claramente que son bienes privados del Estado general o de los Estados particulares: inciso 2, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra..."

Como se puede apreciar, el Código Civil reconoce la autonomía del derecho minero y se puede decir que trazó el futuro artículo 7º del Código de Minería, cuando dispuso "que son bienes privados de la Nación o de las provincias según el territorio en que se encuen-

tren. Es el mismo concepto que el que dispone el artículo 2.342, inciso 2, del Código Civil.

El artículo 11 del Código de Minería nos dice también: "Las minas forman una propiedad distinta del terreno en que se encuentran pero se rigen por los mismos principios que la propiedad común".

Existe, a no dudarlo, en nuestra República, una clara tendencia a desconocer la costumbre y los principios históricos de nuestras instituciones jurídicas.

El régimen militar lo hizo a través de la ley 22.259, cuando entre otras modificaciones incorporó dos nuevos títulos al Código Minero, títulos XVIII y XIX.

Debo decir, no obstante, que no siendo la más recomendable la redacción que introdujo la reforma de la ley 22.259, tuvo el acierto de haber consultado a las facultades de derecho del país, mientras que, por lo menos, por lo que me consta, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba no fue consultada en este caso.

Esto lo pongo de manifiesto porque existen errores sustanciales desde el punto de vista jurídico en el proyecto a consideración.

El proyecto de ley, no obstante no utilizar ninguna denominación debe denominarse: régimen de inversiones para la actividad minera. Ello surge de la lectura del artículo 1º, que nos dice que se instituye un régimen de inversiones, para la actividad minera.

Este artículo, además, le otorga demasiadas atribuciones al Poder Ejecutivo, que me atrevo a decir son inconstitucionales, ya que dice que el régimen de promoción estará regido por la presente ley y las normas reglamentarias que el Poder Ejecutivo dicte.

Como sabemos, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos, resoluciones, reglamentos pero no normas, ya que pareciera que se le faculta a arrogarse funciones legislativas al Poder Ejecutivo. Debe suprimirse entonces, la palabra norma y buscarse una mejor redacción.

El artículo 2º del proyecto nos precisa a qué organismos debemos dirigirnos, para acogernos al régimen de la presente ley, y dice que hay que concurrir a la autoridad de aplicación. El artículo 27 de este proyecto faculta a la Secretaría de Minería a recibir los datos para actualizar el mapa geológico de la República. El artículo 2º debe ser modificado y establece cuál es el organismo del Estado encargado de realizar la inscripción para acogerse al régimen de la ley. La redacción que propongo es la siguiente: "Los interesados en acogerse al presente régimen deberán inscribirse en la Secretaría de Minería de la Nación, en el registro que se habilitará al respecto".

El tercer artículo tiene varios incisos: el inciso a) debe precisar qué tipo de delitos son los que no permiten acogerse al régimen del proyecto de ley en consideración. Por ejemplo el robo de una camioneta afectada al régimen de promoción sería un delito doloso; un homicidio preterintencional producido en una mina sometida a este régimen, sería un delito doloso; que el cónyuge, beneficiario del régimen de promoción lesione a su esposa en una mina sometida a este régimen sería un delito doloso. Estos delitos pueden justificar la incompatibilidad con el régimen del proyecto. Dependerá en-

tonces del funcionario de turno y de la formación moral y religiosa de éste, lo que crea una incertidumbre no justificable en un estado de derecho, y más en una República, donde todos los habitantes son iguales ante la ley. Pretendo que los ciudadanos sepan cómo conducirse en este régimen de promoción y cuándo la actividad delictiva implicará perder el régimen al que se ha regido.

El inciso b) del artículo 3º no genera mayores problemas en su interpretación, ya que si tiene deudas firmes, exigibles e impagas, no puede gozar del régimen de promoción; estas deudas pueden ser de carácter fiscal o previsional. Lo mismo la segunda parte del inciso, cuando se refiere a la materia aduanera, impositiva o previsional, haciendo referencia a la decisión, palabra que es más propia de otras disciplinas en la forma de su empleo. Digo entonces que esta redacción puede mejorarse y, en lugar de la palabra decisión, que es más propia del área deportiva, la palabra correcta es resolución. Los jueces y la autoridad administrativa "resuelven", los árbitros de básquet o de fútbol, "deciden".

El artículo 4º dice que el presente régimen para poder ser aplicado en cada una de las provincias necesita de su adhesión mediante ley.

Creo que éste es el punto neurálgico del sistema ya que se necesita la adhesión de la provincia, sistema que por otra parte fue utilizado a partir del año 1948, con la adhesión por parte de las provincias al régimen forestal que dispuso la ley 13.273. Las provincias que se adhieran al sistema percibirán el tres por ciento en concepto de regalía, y una regalía provisoria (ver artículo 22 del proyecto).

¿Qué provincia argentina se va a adherir a este sistema? Sin ninguna duda las que se encuentren en una situación financiera desesperada, ya que conforme al derecho público provincial, los funcionarios que se adhieran pueden ser sometidos a juicio político, conforme lo que establecen sus respectivas Constituciones provinciales, tal lo que sucede con la de Córdoba (artículo 68), San Juan (113), San Luis (88), Río Negro (70), entre otras. Estos artículos en forma general defienden el dominio sobre los yacimientos minerales y otros recursos naturales, sean renovables o no.

Será en consecuencia imposible ingresar al sistema por lo que disponen estas Constituciones provinciales. Los funcionarios que se adhieran pueden ser sometidos a juicio político y posteriormente destituidos.

El capítulo III trata, en los artículos 5º y 6º, las actividades que están incluidas y las que no lo están, dentro del régimen de promoción.

Existe en mi concepto un error conceptual de parte de los autores del proyecto, que han ingresado a una casuística innecesaria, más propia del decreto reglamentario que de la ley. Para precisar digo: según doctrina, la actividad minera se divide en cuatro grandes etapas: a) exploración; b) adquisición del derecho minero; c) explotación; d) beneficio de los minerales. Por ello es que el artículo 5º peca de reiterativo porque desconoce la terminología minera. El proyecto dice que las actividades comprendidas en el régimen son: "a) Prospección, explotación, desarrollo, preparación y extracción de las sustancias minerales comprendidas en el Código de

Minería". Desde ya me parece que la mejor redacción sería la siguiente: "Artículo 5º, inciso a) Exploración, explotación y beneficio de las sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería".

Como vemos, en el texto del proyecto no figura la palabra exploración y sí prospección, que es un tipo si se quiere o una forma de exploración. La explotación abarca la extracción, y las palabras desarrollo, preparación y extracción no son más que diferentes etapas de la explotación. El inciso b) del artículo 5º no hace más que describir lo que es el beneficio de los minerales, por lo que solamente con la palabra beneficio se comprende todo lo que dice el inciso. Ahora bien, el proyecto habla de todos los minerales comprendidos en el código, por lo que también quedan incluidos los minerales nucleares o sustancias radiactivas, que están excluidos del régimen establecido en la minería a gran escala (artículo 412 Código Minero).

El artículo 6º en sus cuatro incisos regula las actividades que se encuentran excluidas del régimen de promoción: los hidrocarburos líquidos y gaseosos (los sólidos, siendo sustancias de primera categoría del Código de Minería, están incluidos dentro del régimen de promoción); el proceso industrial de la fabricación de cementos a partir de la calcinación; el proceso industrial de fabricación de cerámicas; las arenas, canto rodado y piedra partida, destinados a la industria de la construcción.

El régimen impositivo debe ser objeto de un pormenorizado estudio, aunque entiendo que debe reducirse al mínimo la percepción impositiva por esta actividad; el IVA debe ser eliminado. El minero paga el canon, invierte capital y trabaja con una intensidad adecuada, según la ley que regula el amparo de las minas, que es un capítulo del título IX del Código Minero. La actividad minera es una actividad riesgosa, como expresamente lo reconoce la exposición de motivos del proyecto. Entonces, ¿para qué gravar una actividad que es madre de las industrias del país, como internacionalmente lo ha demostrado la China comunista actualmente?

El método que sigue este proyecto es realmente preocupante, ya que a los capítulos los divide en títulos, cuando es verdaderamente a la inversa. Pareciera que fue redactada por profesionales no vinculados al mundo jurídico. Los títulos se dividen en capítulos y no a la inversa, como lo hace la pretendida ley. Es una cuestión metodológica de gran importancia y aconsejo sea corregida.

El capítulo IV se refiere al tratamiento fiscal. El título I se denomina *Estabilidad fiscal*, la que se establece por 30 años, contados a partir del estudio de factibilidad. A su vez no puede afectarse la carga tributaria total. La Nación, las provincias y los municipios no pueden aumentar las contribuciones impositivas o tasas. Lo mismo respecto al régimen cambiario o arancelario (artículo 8º). El artículo 9º dispone que las disposiciones del título no alcanzan al IVA, el que queda sometido al tratamiento impositivo general. El artículo 10 indica que la autoridad de aplicación (Secretaría de Minería según nuestra opinión), emitirá un certificado con las contribuciones tributarias y tasas aplicables a cada proyecto, tanto en el orden nacional, provincial y muni-

cial. Como vemos, invade atribuciones de las provincias y de los municipios, violando normas básicas, sumado a que el derecho público provincial y municipal estima cada vez más la participación del municipio, tal lo que se puede apreciar también de las leyes orgánicas municipales y principalmente en las Constituciones provinciales dictadas a partir del año 1988 en el país. Al analizar el artículo 11 del anteproyecto se advierte que se cumple el viejo dicho argentino: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.

El artículo 12 reitera sobre lo que hemos expresado. Debe suprimirse la palabra prospección y utilizar exploración y explotación en lugar de ensayos mineralúrgicos y metalúrgicos.

El artículo 13 se refiere a las inversiones de capital. En el inciso a) propongo la supresión de la palabra operación, que es una palabra más propia del arte de curar, por la de actividad minera. Entonces quedaría redactada de la siguiente manera esta primera parte: artículo 13, inciso a): "Las inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la actividad minera..."

Habría otras importantes cuestiones que debatir, pero no se puede pasar por alto el título III, que comprende los artículos 15 y 16 del anteproyecto. Este título se denomina *Avalúo de reservas*. Mi preocupación es cómo se establece, ya que simplemente exige la firma de un profesional responsable, quien avalúa las reservas, que pueden ser capitalizadas hasta en un 50 por ciento. Esto puede dar lugar a maniobras fraudulentas, ya que con este certificado pueden comenzar a emitir acciones. Me parece que se le debe dar intervención a las direcciones provinciales de minería de las respectivas provincias, para que controlen por lo menos si realmente existe en ese lugar algún yacimiento de minerales. No estamos en plena pampa húmeda donde no se conoce una montaña. Esto ha sucedido en nuestro país.

Sin dejar de darle importancia a los demás artículos, que he estudiado en profundidad, voy a referirme a dos artículos que parecen fundamentales; uno es el capítulo VI, de las *Regalías*, artículo 22. Ya emití opinión al tratar los primeros artículos de este proyecto. Entiendo que pueden someterse estas autoridades a juicio político tal como lo expresé, con el riesgo de la destitución. Reitero, las provincias y la Nación son dueñas de los yacimientos según el territorio en que se encuentren.

Respecto al capítulo VII, artículo 23, sobre *Conservación del medio ambiente*, esa norma no tiene coactividad. Vemos diariamente la destrucción del medio ambiente por la actividad humana y por puro ánimo de lucro. Debe establecerse un porcentaje de la producción para ser destinado a la protección del medio ambiente, que deberá depositarse en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina de la República y a la orden de la Secretaría de Minería de la Nación. ¿Qué sucedería por ejemplo con una empresa que retiene este 5 por ciento de los costos operativos de extracción y beneficio durante los años que dure el régimen de promoción, si es declarada en quiebra? Este es un ejemplo; hay muchos. Sin coartar la libertad individual, pero teniendo en cuenta las miras del interés superior de la comunidad, estimo que este fondo debe ser regulado de otra manera. La inten-

ción es buena, pero con la normativa que tenemos no alcanza. Sucedió algo parecido con los consorcios voluntarios de conservación de los suelos (ley 22.428). No fue suficiente porque no tuvo coactividad.

La autoridad de aplicación —entendemos y lo hemos dicho— debe ser la Secretaría de Minería de la Nación, pero las facultades que dispone el artículo 24 a favor de la autoridad de aplicación no harán otra cosa que permitir el amiguismo, que además es muy frecuente en la República. La ley debe ser clara; todos somos iguales ante la ley, y en el segundo párrafo del artículo 24 la autoridad de aplicación tiene facultades para ampliar plazos y aceptar modificaciones de las declaraciones juradas. Entonces yo, Domingo, amigo de Carlitos, consigo la amplitud del plazo y la modificación de la declaración jurada, mientras que Eduardo no lo consigue porque está enemistado con Carlitos. Solamente este sistema funciona bien en determinados países donde el amiguismo no funciona, como por ejemplo sucede en Francia donde la concesión no se otorga al primer descubridor sino que la autoridad le impone cargas y quien las cumple se queda con el yacimiento de minerales. Se llaman los cuadernos de carga.

Por último, debo referirme al artículo 30 en su último párrafo, porque es bueno que un régimen que pretende la inversión del capital extranjero y nacional en el alto riesgo como lo es la actividad minera, tenga reglas claras de procedimiento. El procedimiento debe estar establecido en la ley ya que, si no, se altera la defensa en juicio, el debido proceso legal y la actividad privada. Debe suprimirse entonces la facultad de la autoridad de aplicación de determinar los procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas en el mismo artículo en párrafos anteriores.

En mi opinión, este proyecto debe volver a las comisiones para un mejor estudio.

COMPLEMENTACION DE LOS FUNDAMENTOS

1. Introducción

El proyecto de ley de Inversiones Mineras del Poder Ejecutivo está orientado a brindar estabilidad fiscal (título I) y régimen de regalías moderadas (artículo 22) para estimular la búsqueda de yacimientos.

La iniciativa del Poder Ejecutivo contempla la adhesión de las provincias mediante convenios, y garantiza la estabilidad fiscal por el término de 30 años, lo cual es aparentemente una condición necesaria, aunque no suficiente, para estimular la inversión minera en la Argentina.

Considero que no existe un plan alternativo para dar solución a los problemas económicos de la Argentina y que pueda sustituir al Plan de Convertibilidad. O sea: el plan debe ser defendido.

Por ser representante de una provincia que tiene yacimientos metalíferos y haber vivido muchos de mis mejores años en una comunidad minera, me veo en la obligación de transmitir mis preocupaciones y mis ideas en ocasión de la discusión de la legislación que regirá la minería.

He presentado un proyecto alternativo al proyecto de ley de inversiones mineras del Poder Ejecutivo. Este

proyecto alternativo no tiene otro contenido que la reivindicación de la ley 22.095. Reconozco que esta ley está desprestigiada y que requiere modificaciones.

Siendo así el caso, ¿lo he presentado sólo para molestar y crear un debate sobre un tema vacío de contenido? No.

Tengo serios fundamentos para demostrar que, para que pueda coexistir la minería argentina con el Plan de Convertibilidad, es necesario establecer una legislación que compense al menos parcialmente la situación de altos costos nacionales, originados en situaciones fuera de control de los productores (impuestos, infraestructura y servicios).

Es por ello que quiero llamar la atención de los señores diputados, porque la ley propuesta por el Poder Ejecutivo no debe salir aprobada de esta Cámara.

Debe ser analizada nuevamente y modificada, pues caso contrario se desvanecen totalmente las esperanzas de que exista una minería en el país, la cual requiere dos condiciones: la estabilidad que brinda el Plan de Convertibilidad y ciertas medidas concretas, contenidas parcialmente en la ley 22.095.

2. Comparación de ambas leyes

2.1. Según la Ley de Inversiones Mineras propuesta, los beneficiarios del régimen serán eximidos del impuesto sobre los activos, pero sólo durante el período de exploración e inversión, mientras que la ley 22.095 lo extiende durante los primeros años de la explotación para mejorar el llamado valor presente neto y tasa interna de retorno de los desarrollos mineros.

Dado que entiendo que hay proyectos del Poder Ejecutivo para eliminar este impuesto, que desestimula la inversión, creo que no vale la pena extenderse en su consideración dado que es válido tanto para las inversiones mineras como para cualquier otra inversión productiva.

2.2. Ambas leyes, la existente y la propuesta, liberan de derechos de importación sólo a los bienes de capital y equipos especiales.

Estas medidas permiten que se haga la inversión en condiciones similares a las de Australia, Canadá o Chile. Pero, ¿qué pasa durante la operación?

2.3. Para hacer competitiva a nuestra minería habría que lograr que los materiales, repuestos y otros insumos que se incorporan en el proceso y que van a permitir producir metales para exportación, no estén recargados con lo que se ha dado en llamar "el coste argentino", para que nuestra minería pueda competir en igualdad de condiciones.

El efecto del artículo 1 de la ley 22.095, que establece que "Los beneficiarios de esta ley gozarán con relación al impuesto al valor agregado sobre los productos de las exportaciones mineras de una reducción del impuesto resultante..." es equivalente a la reducción de uno de los ingredientes del coste argentino durante los primeros 7 años, reduciéndose paulatinamente hasta el año 15º. Esta es la principal medida de promoción que tiene que incorporarse a cualquier legislación.

2.4. El anteproyecto propone que no se estatice el riesgo minero, promocionando sólo la inversión de las etapas de exploración, bajo la concepción que, una vez determinada la factibilidad técnico-económica, desaparece el mismo, y asumiendo el riesgo empresario, se deben pagar altos impuestos y regalías.

¿Quiénes de los señores diputados han visitado una mina?

¿Qué porcentaje de los argentinos ha estado en los socavones, túneles, piques y chimeneas de una mina subterránea? ¿Cuántos de los funcionarios y empresarios que han trabajado en la elaboración del proyecto tienen una cabal idea de lo que esta industria representa?

Normalmente un proyecto minero se inicia con una cantidad de reservas (mineral económicamente explotable) que permite suponer que se recuperará la inversión.

Pero a diferencia de cualquier otra actividad, en la cual se puede seguir indefinidamente produciendo un bien o un servicio mientras las condiciones del mercado lo permitan, en minería es necesario continuar explorando permanentemente para reponer el recurso no renovable que se consumió durante el año fiscal.

3. Hay que ver la realidad

La minería en la Argentina está en franco retroceso. Los pocos yacimientos que han dado los metales que el país utilizó durante más de medio siglo, están cerrados o en proceso de achicamiento.

No obstante, se está reemplazando una verdadera ley de promoción, que —reitero— sumada a la estabilidad actual daría mejores chances de recuperación, con una ley que a todas luces no ofrece mejores condiciones a los productores.

Quiero llegar con mi mensaje para que al menos no quede sobre mi conciencia la sensación de que he visto pasar frente a mí la oportunidad de expresar una firme convicción y que por facilismo no lo hice.

Creo que quienes conocen de minería sucumbieron ante las presiones de tener que presentar un proyecto que satisficiera a ciertos lineamientos económicos racionales —en muchos casos irrefutables—, pero que no se aplican a la minería.

Quiero recordar que el P.B.I. que corresponde a la minería metalífera fue del orden de los 100 millones de dólares, y se encuentra en permanente declinación, tendiendo a desaparecer la actividad si no se establece un marco económico y fiscal que le permita sobrevivir en las nuevas condiciones.

No estoy tratando en esa ocasión que se vuelva a abrir Hipasam, en Sierra Grande, pero quiero decir que la venta de 800.000 toneladas anuales de pellets ha representado una pérdida de 38 millones de dólares anuales que actualmente brindan empleo en Brasil.

No pretendo reivindicar a las empresas del Estado, pese a que toda la minería del cobre de Chile es mayoritariamente de Codelco, empresa totalmente estatal, o la del hierro en Brasil, donde también es mayoritariamente de C.V.R.D., mayoritariamente estatal.

Lo que quiero decir es que, en la explicación y el debate de la legislación que estamos considerando, se

ha tomado en diversas oportunidades a Chile como ejemplo. Y en Chile la principal minería es estatal.

¿Es consciente nuestra opinión pública de que también en Alemania, Gran Bretaña, Suecia y Finlandia la minería es mayoritariamente estatal? ¿Es consciente que en la mayor parte de los países del mundo occidental goza de protecciones a través de precios internos, que en ciertos casos, como en Alemania, triplican a los precios *spot* de mercado?

Coincido con el gobierno en que nuestro Estado nacional está exhausto y que no debe intervenir en nuevos proyectos, dejando la minería a los privados.

Pero es por ello que quiero explicar que existen evidencias irrefutables de la realidad minera nacional que requieren de medidas específicas de promoción como las establecidas en todos aquellos países del mundo que tienen minería.

He hablado de Hipasam, pero la desaparición de la producción de Pirquitas, Nueve de Octubre y Puesto Viejo, en Jujuy, las penurias y el permanente achicamiento de Providencia y Aguilar también en Jujuy, el cierre temporal de Camino de Castillo en Chubut, son manifestaciones de una situación muy preocupante, que si bien es desconocida por la mayoría de los argentinos, no debe pasar desapercibida por los señores diputados en el momento en que se debate esta ley.

4. *No es conveniente que lo poco que existe sea destruido*

Para tener un punto de despegue, es fundamental no matar lo existente, que debe ser el embrión de cualquier desarrollo.

Como decía anteriormente, la minería metalífera y la de los minerales industriales, que compite con precios internacionales, es prácticamente inexistente. Actualmente el P.B.I. de la primera ha quedado por debajo de los 35 millones de dólares, y los pequeños sacrificios que puede hacer el fisco para promocionar esa actividad no tendrán un costo fiscal superior a los 10 millones de dólares.

Cualquier empresa que mire dentro del país para explorar, busca como referencia a las empresas establecidas, y si las mismas mueren, ésta es la peor promoción que se puede lograr.

5. *La ley 22.095 permitió el uso de recursos fiscales en forma ineficaz.*

La ley 22.095 está desprestigiada debido a que algunos de sus artículos han permitido una ineficiente intervención estatal y maniobras especulativas privadas.

Después de haber convivido durante varios años con la ley de promoción minera, no ha pasado desapercibido para mí, en mis actividades de abogado y de político, que el llamado parque minero, concebido para apoyar a los pequeños productores con equipamiento que le facilitara el comienzo de sus actividades, fue una promoción ineficaz.

Tampoco ignoro que se concedieron y aplicaron erróneamente los créditos, que en muchos casos no fueron destinados a los fines concebidos y dieron lugar a numerosas irregularidades.

¿Pero no es lógico eliminar estos aspectos negativos de la ley y rescatar los aspectos positivos?

6. *Hay aspectos positivos de la ley 22.095 que es necesario rescatar en cualquier nueva legislación.*

La ley 22.095 contiene en alguno de sus artículos estímulos fiscales concretos, que permitirán neutralizar en parte los efectos de los elevados costos internos.

Mediante mi proyecto he tratado de llamar la atención de los señores diputados diciendo que la ley propuesta por el Poder Ejecutivo es insuficiente, y que para que realmente se produzca un despegue deben rescatarse los aspectos positivos de la ley 22.095.

¿Cuáles son estos aspectos positivos? El efecto de los artículos 9 y 11 de la ley equivale a modificar lo que se denomina el *cut-off* de los yacimientos (ley de corte o contenido metálico que hace a los mismos económicamente explotables). Convierte a yacimientos marginales dentro de un contexto de altos costos (expresados en divisas) en yacimientos explotables.

No es éste el momento en el cuál pueda explicar detalladamente este concepto, pero apelo a la credibilidad de los señores diputados a fin de que me den la oportunidad para que se pueda explicar a técnicos o economistas de vuestra confianza la importancia de estos aspectos de la legislación que se encuentra en consideración.

7. *La minería requiere una legislación que le permita coexistir con el plan de convertibilidad.*

Inteligentes y bien inspiradas ideas del equipo económico nos han permitido pasar de un P.B.I. de 60 millones de u\$s valuado en divisas, a 163 mil millones de dólares.

Con esto recaudamos lo que necesitamos para los gastos del Estado y para pagar nuestras deudas.

¿Qué pasa si se modifica la paridad? Se reduce el P.B.I. y la recaudación fiscal valuada en dólares y, por lo tanto, nuestra capacidad de pago de la deuda externa e interna.

¿Qué pasa si se reduce la presión fiscal o se otorgan generalizados beneficios de promoción? Se reduce la recaudación y no podemos pagar.

Entonces, ¿por qué estoy defendiendo la promoción minera? Quiero reiterar que estoy convencido de que hay que sacar adelante el Plan de Convertibilidad porque no hay otra solución. Pero creo que se debe identificar a tiempo aquellas actividades que son indispensables para la economía nacional y para la balanza comercial, que necesariamente requieren un marco fiscal v normativo que le permitan sobrevivir.

Se atribuye a la mala legislación minera (ley 22.095) la falta de desarrollo minero en el país, pero la escasa o nula inversión ha sido consecuencia de una política económica global que hacía que Argentina no fuera confiable para proyectos de inversión de largo aliento. Con la actual estabilidad, la promoción establecida en algunos artículos de la ley 22.095 y las garantías de estabilidad fiscal y regalías moderadas, las cosas pueden ser diferentes.

8. Hay mejores posibilidades de que se inicien algunos proyectos con una legislación promocional.

Hay algunos proyectos que con un marco económico y fiscal adecuado podrían hacer subir el P.B.I. minero a 500 millones de dólares en menos de cinco años: Pachón (en San Juan), Bajo la Alumbraera (en Catamarca), Cerro Vanguardia (Santa Cruz) y el Potasio (de Mendoza), pero que no pueden ponerse en marcha sin las debidas garantías (que brinda la Ley de Inversiones) y estímulos (que contiene la ley 22.095).

El valor presente neto de proyectos en evaluación mejora a un punto tal que proyectos que no resultan viables sin estímulo fiscal, son rentables con los citados beneficios.

La escasa minería metalífera de nuestro país está muriendo, y no por el agotamiento de los yacimientos sino porque no puede coexistir con una paridad cambiaria como la que necesita la economía argentina para su desarrollo equilibrado. ¿Dejamos morir a la minería o creamos las condiciones fiscales para que subsista y se desarrolle?

La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿no pasa lo mismo con el resto de la industria? Por favor, sigan mi razonamiento y verán que no es el mismo caso.

Una automotriz, o una fábrica de televisores, invierte, por ejemplo, 10 millones de dólares durante pocos meses en el montaje de una planta, y en menos de un año tiene ventas por 50. Cuando por razones internas (altos costos) no puede competir, levanta sus instalaciones, en gran parte recuperables, y se va a otra parte. El inversor lo sabe; en realidad sabe que su riesgo empresario está acotado, y no es demasiado.

Esto es sólo para ejemplificar la diferencia entre minería y otras actividades industriales, y explicar lo que se llama "riesgo minero", muchas veces mencionado pero pocas comprendido.

Quienes conocemos de minería metalífera, sabemos que los expertos internacionales consideran que se debe hacer una inversión en exploración de veinte o treinta millones de dólares durante cinco años para tener alguna chance de encontrar un yacimiento significativo, y que luego se requieren inversiones entre 50 y 500 millones de dólares, durante no menos de tres años, para comenzar a producir en la gran minería.

Las ventas anuales no superarán el 30 % del valor de la inversión, por lo que la recuperación de dicha inversión es lenta y muy expuesta a las oscilaciones del mercado.

¿Qué surge de ello? ¿Qué ha faltado en la ley 22.095 que le permitiera cumplir con los objetivos enunciados? Le ha faltado el concepto de la estabilidad fiscal que tiene el anteproyecto del Poder Ejecutivo, y que necesariamente hay que introducir en la ley, dado que ningún inversionista va a iniciar una seria tarea de exploración cuando sabe que tiene un techo de 15 años para recuperar su capital.

9. Analogía con otro recurso no renovable que es indispensable para la economía nacional

¿Cuánto valdría nuestra producción de petróleo si lauviésemos que importar a los precios del mercado,

digamos a 18 u\$s el barril? Los aproximadamente 220 millones de barriles que producimos anualmente nos costarían 3.960 millones de u\$s, sin contar el gas natural que lo acompaña, con lo que con seguridad superamos la suma de 5.500 millones.

Sin embargo, y a pesar de que el promedio de los pozos en producción de YPF no produce mucho más que 23 m³/día, en comparación con los de Kuwait o Arabia Saudita, que producen más de 1.000 m³/día, a ningún gobernante ni a ningún argentino entendido y bien intencionado se le ocurrió sustituir el petróleo nacional con el importado, a pesar de que su costo de extracción (por el rendimiento de los yacimientos) es inferior.

¿Es esto sensato? ¡Absolutamente sí! Una gran preocupación que tengo, y que no dudo que preocupará también a nuestros economistas, es el déficit de nuestra balanza comercial, que alcanzó a los 2.500 millones de dólares. ¿Qué pasaría si nuestro PBI se reduce en 5.500 millones por dejar de producir petróleo y aumentan las importaciones en 5.500 millones más? Inmediatamente fracasa el Plan de Convertibilidad y colapsa la economía.

¿Cómo se pueden explotar los yacimientos argentinos con rindes de 23 m³/día para sustituir importaciones de otros yacimientos? Simplemente porque se ha diseñado un marco fiscal y económico coherente. El lobby de los poderosos intereses petroleros —y no uso la palabra en el sentido peyorativo, dado que entiendo que es la posibilidad que en un régimen democrático tienen los empresarios de hacer escuchar sus inquietudes— ha sabido hacer llegar sus sugerencias para que se genere un soporte fiscal que permita el crecimiento de la actividad.

¿En qué consiste este marco económico-fiscal que permite la extracción del petróleo nacional? Mi escasa experiencia en esa Cámara me impide emitir una opinión muy fundamentada, pero como ciudadano sé que pago 70 centavos de u\$s el litro de nafta, mientras que la nafta argentina se vende en Chile a 50 centavos, siendo la carga impositiva similar.

¿Qué quiere decir esto? Que se ha creado para las empresas estatal y privadas un cuadro tarifario que les permite crear un marco económico y financiero suficiente para explorar, explotar y refinar los hidrocarburos. ¿Quiénes lo pagamos? Todos los argentinos que usamos estos combustibles. Y esto está bien pues no se me ocurre otra solución.

¿Qué tiene que ver este caso con la legislación minera? El petróleo es un caso muy comparable con los metales o sus concentrados y con ciertos minerales industriales como los boratos, y el potasio por tratarse de materias primas no perecederas que por su valor pueden soportar los costos internacionales para comercio internacional.

10. Al diseñar el futuro, no podemos ignorar las experiencias del pasado.

Apelo a los funcionarios del Poder Ejecutivo para que hagan un esfuerzo y escuchen sin prejuicios mis

reflexiones. Tal como dije anteriormente, de los 100 millones de dólares de P.B.I. que teníamos en minería metalífera (y posiblemente baratos), hoy tenemos menos de 50 millones, lo cual es una bagatela comparado con toda la economía nacional; pero fácilmente, podrían ser 500. Esto, aunque pequeño, sumado a otros elementos, puede contribuir a que se equilibre la balanza comercial en el mediano y largo plazo.

No considero que mi propuesta alternativa sea suficiente, y no pido el voto para ella. Pido que el proyecto sea devuelto a comisión y que se tengan en cuenta los argumentos sintetizados en esta ocasión, que pueden ser extendidos de acuerdo a los requerimientos de los señores diputados.

Creo que deben ser eliminados los artículos de la ley 22.095 que han contribuido a su desprestigio y que han permitido la especulación de los empresarios y la burocracia estatal.

Deben ser incorporados en la Ley de Inversiones Mineras todos aquellos artículos que han sido instrumentos de promoción para los productores, junto a los

principios que brindan estabilidad fiscal y régimen de regalías moderado y homogéneo.

11. La legislación propuesta es insuficiente; hay que mejorarla.

El proyecto de ley de inversiones mineras no satisface en absoluto las necesidades mínimas para que se produzca un incremento de esta actividad.

1. Hay que brindar la estabilidad fiscal para estimular la inversión en exploración, y ello está contenido en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

2. Hay que mantener y profundizar ciertas medidas de promoción contenidas en la ley 22.095 para compensar parcialmente ciertas desventajas relativas que genera al productor la paridad cambiaria, con la cual esperamos vivir por más de 30 años.

3. Se puede eliminar todo el contenido de la ley que representó un ineficaz intervencionismo estatal y permitió la especulación privada.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FOLLONI

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de inversión para la actividad minera

Somos representantes del pueblo de una provincia de enorme potencial y fuerte vocación minera. Pero, además, integramos una región con tales características. Todos conocen al respecto lo que significa el Noroeste Argentino.

Sin embargo, también todos lamentablemente, reconocemos el grado de subexplotación de los recursos mineros a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Largo resultaría enumerar la serie de problemas, circunstancias y motivaciones que han determinado esa situación. No pretendemos recrearlos en esta ocasión.

Simplemente recordamos que como provincia y región históricamente marginada, esos problemas nos han afectado particularmente, prolongando un estado de estancamiento estructural que nos impide alcanzar un estado de desarrollo armónico y sostenido que en última instancia mejore las condiciones de vida de ese pueblo que representamos.

Tampoco pretendemos recrear la antinomia de zonas desarrolladas frente a economías regionales. Simplemente buscamos superarla a través de una economía nacional integrada.

En tal sentido, estamos convencidos de que el camino es el de crear las condiciones básicas indispensables para generar un proceso de crecimiento acorde con las posibilidades que la dotación de recursos permite.

También estamos convencidos de que el sector minero es uno de los que deberá obrar como factor de punta en el proceso económico y que de su dinamismo y eficiencia productiva dependerá en gran medida, la posibilidad de crecer.

Sabemos que el sector minero está asociado a la disponibilidad de recursos naturales y a la ubicación geográfica de los mismos y que por sus propias características utiliza en general más intensivamente el capital que el trabajo humano. Pero es en el proceso industrial en sí mismo, vía los efectos inducidos hacia los demás sectores económicos, donde se producirá el mayor efecto ocupacional. Por ello entendemos que se deben desarrollar al máximo el empleo de nuestros recursos naturales disponibles, en una acción combinada con el impulso a la industrialización provincial y regional de sus productos.

La industria resultante será así genuina, y por lo tanto permanente, al estar localizada en la vecindad de su materia prima principal, asegurando por lo tanto la colocación de los productos primarios susceptibles de ser transformados.

Naturalmente, respecto de la industrialización de productos mineros, las posibilidades de la industria están íntimamente vinculadas al logro de inversiones privadas para el desarrollo de yacimientos y de los propios establecimientos industriales y a la adquisición de tecnologías que estimulen el procesamiento de nuevos minerales.

En consecuencia, resulta de fundamental importancia contar con condiciones claras que induzcan a concretar esas inversiones nacionales e internacionales en este sector productivo.

Obviamente, esas condiciones deben significar, debido a las características de la actividad, un esfuerzo para ubicar al sector en equivalencia competitiva con los demás, coadyuvando así al establecimiento de un cuadro de situación que aliente la expectativa del empresario privado.

Y ese cuadro, ese esquema de aliento a la inversión de riesgo, no cerraría si no legisláramos sobre la posibilidad de introducir e incorporar, sin pago de derecho alguno, equipos, bienes de capital y tecnología; si no legisláramos sobre la posibilidad de que las reservas mineras puedan ser capitalizadas sin que la mencionada capitalización tenga efectos en la determinación del impuesto a las ganancias; si no legisláramos propiciando las inversiones de riesgo minero, permitiendo descontar del balance impositivo hasta el 100 % de las inversiones efectuadas en las etapas previas de un proyecto; en último análisis, si no legisláramos sobre la necesidad de asegurar la estabilidad fiscal para esta particular rama de actividad.

El aumento de las inversiones productivas es una de las necesidades más acuciantes de la situación económica actual, tanto para consolidar el esquema de convertibilidad como para garantizar el crecimiento de la producción, los empleos y los ingresos en el mediano plazo.

Y coincidimos en que los recursos mineros necesitan que se los ponga en producción para transformarse así en un bien social al generar fuentes de trabajo, mayores bienes y mejores ingresos para los habitantes de la República Argentina.

Es más, aspiramos a que a través de proyectos como el que nos ocupa, la riqueza económica que se genere se revierta en mejores niveles de salud, educación y calidad de vida.

Vaya en consecuencia nuestro voto afirmativo, nuestro voto de aprobación al régimen de inversiones para la actividad minera, en la seguridad de no estar declarando nuestra preocupación por el bienestar de nuestra gente, sino de estar contribuyendo a la creación de nuevas fuentes de trabajo como forma concreta de un federalismo bien entendido.